



**Pepe Álvarez**  
Secretario general de UGT

## El sector agrario es esencial: hay que ponerlo en valor

**El sector agrario posee** todas las características de una actividad absolutamente estratégica, que ha estado tradicionalmente infravalorada económica y socialmente. Han tenido que suceder una pandemia histórica y una guerra en el seno de Europa para que muchos sean conscientes de esta realidad. Su evolución participa de todos los grandes cambios que están desarrollándose o que van a tener lugar en las próximas décadas, hasta el punto de que, lo que suceda en el mismo, determinará el éxito de estos cambios y el devenir de nuestra economía y nuestra sociedad.

### Un sector tradicionalmente infravalorado

Cambio de modelo productivo, redefinición de la globalización, futuro del trabajo, transición verde, eliminación de la pobreza a nivel mundial, seguridad alimentaria o sanidad son todos ámbitos en los que el papel del sector primario, y en especial de la agricultura y la ganadería, resulta crucial. Sin embargo, como decía, la atención recibida durante décadas ha sido insuficiente, lo que ha generado un continuo descenso de su peso sobre el valor de la producción nacional y de su empleo,

además de un aumento de las desigualdades dentro del sector.

Tomando en consideración el valor añadido bruto del conjunto del sistema agroalimentario (prácticamente el 10% del total generado por la economía española), sus aportaciones más importantes se realizan lejos de las zonas de producción: un 34% en la distribución, un 22% en la industria, casi un 10% en inputs y servicios, y cerca del 7% en el transporte. Eso significa que, pese a su importancia en muchos órdenes (fijar la población, mantener el empleo, la cultura, la biodiversidad e impulsar otras actividades productivas, etc.), solo uno de cada cuatro euros del valor añadido del sistema agroalimentario pertenece a la producción agraria, que es la que se sitúa plenamente en las zonas rurales.

Además, la elevada presencia de trabajos con un fuerte componente estacional y de temporada ha generado tradicionalmente unas tasas de temporalidad y parcialidad del empleo más elevadas que la media, con menores tasas de actividad y ocupación respecto a las zonas urbanas, e implicando unos niveles salariales considerablemente más bajos. Según los últimos datos disponibles (2020, EPA), el salario bruto mensual en la rama de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es de 1.373 euros, 665 euros menos

(-32,6%) que el promedio nacional (2.038 euros). Esta brecha es incluso más amplia en los contratos a jornada completa, con una diferencia de hasta un 37% respecto a la media nacional.

En suma, existen unas evidentes peores condiciones laborales para las personas trabajadoras de este diverso sector esencial, bien sean asalariadas o pequeñas y medianas productoras, que han visto desplomarse sus rentas debido a la acción devastadora de grandes compañías de producción extensiva que hundan los precios percibidos y ante las cuales se ha puesto de manifiesto, una vez más, una débil actuación pública.

Las personas en el medio rural recibieron en 2020, de media, un 21,1% menos de ingresos que las personas que viven en las áreas urbanas. No es casualidad que la tasa de riesgo de pobreza haya sido siempre superior en el medio rural comparado con los territorios con superior grado de urbanización.

### La pandemia y la guerra en Ucrania están teniendo un enorme impacto

A los citados problemas estructurales que penalizan las actividades agrícolas y ganaderas y, en suma, a la calidad de vida de quienes las desarrollan—y que tan ligados están a la problemática de la denominada *España vaciada o despoblada*—, se han añadido los efectos de las últimas crisis, y en especial la pandemia del coronavirus y, en la etapa más reciente, la guerra en Ucrania, que impacta de manera muy señalada sobre los sectores agroalimentario y energético, y que, por tanto, tiene un especial efecto sobre la economía del medio rural.

Rusia y Ucrania juegan un papel fundamental en la producción y suministro de alimentos a nivel mundial. Las interrupciones logísticas y de la cadena de suministro en la producción de granos y semillas oleaginosas de Ucrania y las restricciones a las exportaciones de Rusia están teniendo repercusiones significativas y aumentan la inseguridad alimentaria mundial.

En 2021, Rusia y Ucrania eran los principales exportadores mundiales de trigo, maíz, colza, semillas y aceite de girasol, y Rusia era el principal exportador de fertilizantes nitrogenados y el segundo proveedor de potasio y fósforo. La falta de materias primas



### Cambio de modelo productivo, redefinición de la globalización, futuro del trabajo, transición verde, eliminación de la pobreza a nivel mundial, seguridad alimentaria o sanidad son todos ámbitos en los que el papel del sector primario, y en especial de la agricultura y la ganadería, resulta crucial

afecta al sector agrícola, porque importamos semillas y fertilizantes, al sector ganadero, porque importamos pienso, y la subida del combustible afectará a ambos sectores y también al pesquero.

Este incremento de los precios de la electricidad, gas, carburantes y otras materias primas se ha trasladado ya al resto de bienes y servicios, aumentando la inflación estructural y amenazando con que se trate de un fenómeno más persistente de lo inicialmente previsto. Todas estas circunstancias ralentizarán la recuperación económica general, pero en mayor medida incidirán sobre la economía de los territorios con más peso del sector agrario, caracterizados por un tejido productivo menos diversificado y más atomizado, lo que en muchos casos puede afectar a la viabilidad de las explotaciones más pequeñas y de carácter familiar.

Para intentar paliar este impacto negativo, el Gobierno aprobó en el mes de marzo un Plan de Choque de Respuesta a la Guerra en Ucrania con algunas medidas dirigidas específicamente al sector primario, como uno de los más afectados, incluyendo ayudas directas de 193 millones de euros dirigi-

das a las explotaciones agrícolas, 169 millones para los productores lácteos y 48 millones para la actividad pesquera. Valorando positivamente la actuación, no obstante, la dificultad de nuevo ha sido y es que se beneficien de ellas las productoras de menor tamaño, las que vertebran nuestro territorio y aportan el sustento a millones de hogares en la España más despoblada.

En este contexto, ante una posible prolongación del conflicto, y de cara a futuras crisis, Europa está estudiando medidas para aumentar la producción agroalimentaria ante la necesidad de aprovisionamiento, para evitar rupturas de suministro y stock. Así, ha flexibilizado determinados requisitos fitosanitarios aplicables a las importaciones procedentes de terceros países, y ha adoptado medidas para adaptar las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) al nuevo escenario, de manera que sea posible aumentar la disponibilidad de superficies destinadas a la producción de cereales y oleaginosas, para poder aumentar la producción agroalimentaria ante una necesidad de aprovisionamiento. También convocará al grupo de expertos del Mecanismo de Res-



**Más allá de la situación creada por la invasión rusa de Ucrania, la agricultura y la ganadería en nuestro país deben insertarse en el seno de un cambio profundo para construir un nuevo modelo de desarrollo económico en el mundo rural para hacerlo más competitivo, digital, sostenible e innovador, que genere rentas, salarios y pensiones suficientes que mejoren la vida de sus habitantes y fomente la fijación de población, principalmente jóvenes y mujeres, donde gane peso la agricultura familiar y el relevo generacional**

puesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria, para hacer un seguimiento estrecho de la situación y proponer soluciones globales.

Se trata, por tanto, de un momento muy delicado para el sector primario y la industria agroalimentaria, que no podemos olvidar que han desempeñado un papel estratégico durante la covid-19, y lo siguen haciendo con la actual crisis provocada por la guerra de Ucrania. Por ello, además de las actuaciones mencionadas a nivel europeo, es imprescindible reforzar el sector para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que viven del mismo y de sus familias. Ello implica mantener ayudas esenciales para el sector e implementar las actuaciones necesarias para que las explotaciones pequeñas y medianas puedan competir en condiciones adecuadas y obteniendo ingresos dignos.

Hay que romper con la tendencia a concentrar la producción y el crecimiento en sus grandes áreas urbanas, equilibrando el modelo de desarrollo mediante el reforza-

miento de las zonas rurales, en tanto que juegan un papel central en la cohesión económica, social y territorial del país.

### **Hay que impulsar un cambio estructural basado en la sostenibilidad, la diversidad y los precios justos**

Pero, más allá de la situación creada por la invasión rusa de Ucrania, la agricultura y la ganadería en nuestro país deben insertarse en el seno de un cambio profundo para construir un nuevo modelo de desarrollo económico en el mundo rural para hacerlo más competitivo, digital, sostenible e innovador, que genere rentas, salarios y pensiones suficientes que mejoren la vida de sus habitantes y fomente la fijación de población, principalmente jóvenes y mujeres, donde gane peso la agricultura familiar y el relevo generacional.

Los diferentes fondos e instrumentos que

proviene de Europa deberían contribuir a ese cambio de modelo de desarrollo en el mundo rural. De un lado, los derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, plasmación del programa *Next Generation* de la UE, deben utilizarse para afrontar algunos de los nuevos retos a los que se enfrenta el sector primario y la industria agroalimentaria, como son la adaptación al cambio climático, protección de la biodiversidad, restauración ecológica, gestión sostenible del entorno, valoración de espacios protegidos, desarrollo del comercio y servicios digitales, acceso a la vivienda y generación de infraestructuras. El éxito de este plan se medirá en gran medida por la incidencia directa que tengan los fondos sobre las pymes y las personas trabajadoras, y condicionará gran parte de nuestro futuro como país para las próximas décadas.

De otro lado, la Política Agrícola Común (PAC), tras 60 años de existencia, tiene también que ayudar a fomentar un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE; y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. En este sentido, el Plan Estratégico de España para la aplicación de la PAC (PEPAC) pos-2020 cuenta con una dotación de 47.724 millones de euros para el período 2021-2027, superando los 50.000 millones de euros si se suma la cofinanciación estatal y autonómica.

Como sindicato, desde UGT debemos destacar que la reforma de la PAC incluya la condicionalidad social: un año antes de ser obligatorio por reglamento, es decir, en 2024, se comprobarán anualmente las posibles sanciones por incumplimiento de la legislación laboral, cruzando los datos con las autoridades laborales, y se aplicarán reducciones a las ayudas de la PAC si existen sanciones.

La nueva PAC pretende ser más ambiciosa climática y ambientalmente, acorde con el Pacto Verde Europeo, para alcanzar la neutralidad climática en 2050, e incluye dos estrategias: "De la granja a la mesa", que pretende alcanzar un sistema alimentario justo, saludable y ecológico en 2030, y "Biodiversidad para el horizonte 2030".

En particular, el objetivo (no vinculante)

de la estrategia "De la granja a la mesa" consiste en impulsar la agricultura ecológica para que el 25% de la superficie agrícola utilizada (SAU) en 2030 se cultive o aproveche ecológicamente. Y el Plan de Acción de la Comisión Europea para el Desarrollo de la producción ecológica de la UE, del 25 de marzo de 2021, pretende incrementar la oferta y la demanda ecológicas.

Son iniciativas relevantes, porque la agricultura y la ganadería ecológica constituyen un elemento clave para alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales, que está marcado por la incertidumbre de la evolución del consumo y el impulso de la investigación y la innovación en este campo. Y, además, porque deben ser un elemento clave para potenciar la agricultura y la ganadería de calidad, que implique precios justos y genere ingresos suficientes para las familias trabajadoras del sector y de su entorno.

### La mejora del empleo en el sector es esencial, y la reforma laboral está siendo muy positiva

Pero no puede haber cambio de modelo de desarrollo ni transición justa sin una mejora de la calidad del empleo, en todas sus facetas, algo que se hace especialmente necesario en el sector primario, donde la elevada temporalidad, la rotación y la insuficiencia de horas trabajadas ha sido estructural. Por eso hay que valorar de manera muy positiva el impacto que está teniendo sobre el sector agrícola los cambios normativos que ha introducido la nueva reforma laboral acordada en el diálogo social.

En este sentido, cabe destacar la expan-

sión de la contratación indefinida, al registrarse 150.000 contratos de este tipo durante los cuatro primeros meses del año, un 260% más respecto al mismo periodo de 2021. De esta forma, la modalidad indefinida ha ganado peso durante los cuatro primeros meses del año, llegando a suponer en el mes de abril una cuota del 49,8% del total de contratos realizados (81.077 indefinidos sobre 162.701), frente a tan solo un 5% en abril de 2021. Sin duda, el nuevo contrato fijo discontinuo está llamado a tener un mayor papel en el sector, puesto que es la figura adecuada para atender, en condiciones de estabilidad, las actividades estacionales del mismo.

Además, a pesar de englobar actividades sujetas a una alta temporalidad, el volumen de contratos de corta duración en el sector se está reduciendo. Así, aquellos con una duración inferior a un mes se han recortado un 7,7% anual, elevándose a su vez la duración media de los contratos, que ha pasado en solo cuatro meses de un promedio de 32,1 días en 2021 hasta los 33,6 días en abril de 2022.

En conjunto, el empleo creado en el sector posee una mayor estabilidad. El volumen de personas con contrato indefinido sobre el total de asalariadas se sitúa en un 49,2%, 5,2 puntos más que en 2021 (44%) y hasta 11,4 más que en 2019 (37,8%), antes de que estallase la pandemia. Sin duda, la mayor estabilidad es positiva tanto para las empresas del sector, que verán aumentada la productividad del trabajo y reducidos los costes que implica una continua rotación, y para los asalariados y asalariadas, que aumentarán sus garantías laborales, sus expectativas de permanencia en el sector y sus

posibilidades de acceso al crédito, entre muchas mejoras.

En los próximos meses, además de consolidar esta tendencia del empleo hacia una mayor estabilidad, será fundamental también impulsar una subida salarial en el sector agrario, ya que, como se ha explicado, parte de una peor situación relativa respecto de la mayoría de ramas productivas, y el actual contexto inflacionista está lastrando el poder adquisitivo de las personas trabajadoras en el sector, en el cual la subida salarial media pactada en convenio es de apenas un 1,78% (dato hasta abril), por debajo del promedio total (2,4%) y muy lejos de la evolución del IPC, que alcanza una tasa media en 2022 de un 8%.

Termino subrayando dos ideas: la necesaria consideración del sector primario como un conjunto de actividades esenciales, sin las cuales no puede haber no solo un desarrollo sostenible y equilibrado económica, social y medioambientalmente, sino futuro para el planeta y para la humanidad, y las implicaciones que ello debe tener en términos de una atención prioritaria al sector, asegurando los suministros y la diversidad y su implantación en el territorio, máxime en momentos de crisis e incertidumbre como los actuales, lo que debe traducirse en inversiones adecuadas, regulaciones protectoras de la competencia y de las buenas prácticas, empleo de calidad y precios, rentas y salarios justos.

España está en buenas condiciones para lograrlo en los próximos años, pero debe convertirse en una política de Estado, en la que todos los agentes implicados trabajen para lograrlo, como vienen haciendo desde siempre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y el conjunto de la UGT. ■